Autoridad Nacional del Servicio Civil Tribunal del Servicio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

# RESOLUCIÓN Nº 002097-2022-SERVIR/TSC-Segunda Sala

**EXPEDIENTE** : 3825-2022-SERVIR/TSC **IMPUGNANTE** : EDUARDO MEGO VELA

**ENTIDAD**: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

**RÉGIMEN**: DECRETO LEGISLATIVO № 728

MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS

SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Carta Nº 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR notificada el 20 de julio de 2021 y de la Resolución Directoral Nº 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH del 19 de julio de 2022, emitidas por el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, respectivamente.

Lima, 4 de noviembre de 2022

#### **ANTECEDENTES**

- 1. El 10 de setiembre de 2020, mediante Oficio Nº 0247-2020-MINAGRI-OCI, la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, en adelante la Entidad, remitió al Despacho Ministerial el Informe de Control Específico Nº 028-2020-2-0052-SCE sobre "Pagos de planillas del personal del Decreto Legislativo Nº 728, Procesos de Contratos y Declaración Jurada del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo".
- 2. Mediante Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR notificada el 20 de julio de 2021, el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego de la Entidad dispuso iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el señor EDUARDO MEGO VELA, en adelante el impugnante, en su condición de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, por presuntamente haber incurrido en el siguiente hecho:

"(...) se ha podido determinar que, en su desempeño como Director Ejecutivo del PEBDICP, actuó negligentemente en el desempeño de sus funciones ya que no dirigió, supervisó y controló la ejecución del pago adicional por conceptos de compensación por tiempo de servicio — CTS, gratificaciones, escolaridad, bonificación vacaciones, refrigerio y movilidad de los años 1994







al 2016, a favor de los trabajadores bajo el régimen Decreto Legislativo № 728, ya que estos se ejecutaron sin que se cuente con documento de reconocimiento de deuda y el sustento para el pago se basó en la Resolución Directoral № 057-2013-AG-PEDICP del 11 de marzo de 2013 y Resolución Directoral № 011-2017-MINAGRI-PEDICP de 23 de enero de 2017, que resuelven la inclusión del beneficio de movilidad y refrigerio a los ingresos remunerativos permanentes, el cual fue ejecutado entre el 18 de enero de 2018 al 27 de febrero de 2018. Del mismo modo durante su gestión se pagó un total de S/34 425.00 por bono de producción del 2017 distribuido entre 34 trabajadores, el cual se efectuó sin documento que acredite por parte del Minagri haber ocupado uno de los tres primeros lugares en la ejecución presupuestal, conforme a lo estipulado en la Resolución № 5 del Tribunal Arbitral del 12 de diciembre de 2014. Lo que generó perjuicio económico a la Entidad de S/ 256,903.08".

En razón a tales hechos, se atribuyó al impugnante la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del artículo 85º de la Ley № 30057 - Ley del Servicio Civil¹, por haber incumplido el numeral 1.1 de la Ley № 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 10º, 12º, 35º y numeral 1 de la cuarta disposición transitoria de la Ley № 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público; los artículos 5º y 6º de la Ley № 30693 – Ley de Presupuesto Público del año 2018, los artículos 8º y 9º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, sus funciones establecidas en el literal b) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del PEDICP, literales b) y j) del artículo 9º del Nuevo Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Jefatural № 337-2001-INADE-6500.

3. Mediante Resolución Directoral Nº 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH del 19 de julio de 2022<sup>2</sup>, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Entidad, resolvió imponer al impugnante la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por ciento ochenta (180) días.

### TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN



¹ Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

<sup>&</sup>quot;Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

<sup>(...)</sup> 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notificada al impugnante el 26 de julio de 2022.

- 4. El 25 de julio de 2022, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral № 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH, bajo los siguientes argumentos:
  - (i) Solicita medida cautelar por la difícil reparación de los perjuicios que le serán ocasionados y por los vicios de nulidad existentes en el procedimiento.
  - (ii) Estuvo encargado de la Dirección Ejecutiva del PEBDICP del 17 de enero de 2018 al 2 de marzo de 2018.
  - (iii) Solo se le podría atribuir faltas hasta el 2 de marzo de 2018, sin embargo, no se inició el procedimiento dentro de los tres (3) años desde la presunta comisión de la falta, el acto de inicio fue notificado el 20 de julio de 2021.
  - (iv) Existe necesidad de emitir una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable.
  - (v) No es razonable que se le prive de su derecho al trabajo con una sanción que no se ajusta a derecho.
- 5. Con Oficio Nº 0555-2022-MIDAGRISG-OGGRH, la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes del acto impugnado.
- 6. Con Oficios Nº 010147-2022-SERVIR/TSC y 010148-2022-SERVIR/TSC, se comunicó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión del recurso de apelación.
- 7. Mediante Carta Nº 001-2022-EMV, el impugnante sostuvo que ya venció el plazo de treinta (30) días hábiles para resolver el recurso de apelación, por lo que solicita que se emita el pronunciamiento respectivo.

### **ANÁLISIS**

# De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo № 1023³, modificado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley № 29951 -







<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Decreto Legislativo № 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

<sup>&</sup>quot;Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:

a) Acceso al servicio civil;

Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013<sup>4</sup>, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.

- 9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de Sala Plena № 001-2010-SERVIR/TSC<sup>5</sup>, precedente de observancia obligatoria sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.
- 10. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil<sup>6</sup>, y el artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM<sup>7</sup>; para

### "Artículo 90º.- La suspensión y la destitución

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil".





b) Pago de retribuciones;

c) Evaluación y progresión en la carrera;

d) Régimen disciplinario; y,

e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ley № 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

<sup>&</sup>quot;CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo № 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Reglamento de la Ley № 30057, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM "Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo № 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente

aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en el Diario Oficial "El Peruano"<sup>8</sup>, en atención al acuerdo del Consejo Directivo del 16 de junio de 2016.

11. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo acuerdo de su Consejo Directivo<sup>9</sup>, se hizo de público conocimiento la ampliación de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

- a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance nacional;
- b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
- c) Aprobar la política general de SERVIR;
- d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;
- e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;
- f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema:
- g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes;
- h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales del Tribunal del Servicio Civil;
- i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
- j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;
- k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;
- I) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y,
- m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema".





para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley.

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía administrativa".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> El 1 de julio de 2016.

Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1450

<sup>&</sup>quot;Artículo 16.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo

Presidencia

del Consejo de Ministros

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL			
2010	2011	Recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016	Recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2019
PRIMERA SALA Gobierno Nacional (todas las materias)	AMBAS SALAS Gobierno Nacional (todas las materias)	AMBAS SALAS Gobierno Nacional (todas las materias) Gobierno Regional y Local (solo régimen disciplinario)	AMBAS SALAS Gobierno Nacional y Gobierno Regional y Local (todas las materias)

- Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial.
- En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de apelación.

## Del régimen disciplinario regulado por la Ley № 30057

- Mediante la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en el Diario Oficial "El Peruano", se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran.
- Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil<sup>10</sup>, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia.





<sup>10</sup> Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES** "NOVENA.- Vigencia de la Ley

- 16. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria¹¹ se estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de setiembre de 2014.
- 17. En ese sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil<sup>12</sup>.

# "UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario

El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento.

Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa".

# ¹²Reglamento General de la Ley № 30057, aprobado por el Decreto Supremo № 040-2014-PCM "Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles:

- a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado.
- c) Los directivos públicos;
- d) Los servidores civiles de carrera;
- e) Los servidores de actividades complementarias y
- f) Los servidores de confianza.

Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso".





a) (...) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Reglamento General de la Ley № 30057, aprobado por el Decreto Supremo № 040-2014-PCM DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

- 18. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, se efectuó diversas precisiones respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1<sup>13</sup> que dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nº 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057.
- 19. Por tanto, a partir del 14 de setiembre de 2014 resultan aplicables las normas previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057.
- 20. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, se estableció cuáles debían ser las normas que resultaban aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:
  - (i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de setiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al procedimiento.
  - (ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.
  - (iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

### "4. ÁMBITO

4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley № 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento. (...)".







¹³ Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC - "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley № 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva № 101-2015-SERVIR-PE



- (iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.
- 21. Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y sustantivas, conforme a continuación se detalla:
  - (i) <u>Reglas procedimentales</u>: Autoridades competentes, etapas y fases del procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa, medidas cautelares, entre otros.
  - (ii) <u>Reglas sustantivas</u>: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones.
- 22. En ese sentido, se debe concluir que, a partir del 14 de setiembre de 2014, las entidades públicas con trabajadores sujetos a los regímenes regulados por el Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, siguiendo las reglas procedimentales mencionadas en los numerales precedentes.

### Del cómputo del plazo de prescripción

23. En la Resolución Directoral № 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH mediante la cual se impuso la sanción, la Entidad ha efectuado el cómputo de los plazos de prescripción respecto a los hechos imputados al impugnante:

"(...) se ha podido determinar que, en su desempeño como Director Ejecutivo del PEBDICP, actuó negligentemente en el desempeño de sus funciones ya que no dirigió, supervisó y controló la ejecución del pago adicional por conceptos de compensación por tiempo de servicio – CTS, gratificaciones, escolaridad, bonificación vacaciones, refrigerio y movilidad de los años 1994 al 2016, a favor de los trabajadores bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 728, ya que estos se ejecutaron sin que se cuente con documento de reconocimiento de deuda y el sustento para el pago se basó en la Resolución Directoral Nº 057-2013-AG-PEDICP del 11 de marzo de 2013 y Resolución Directoral Nº 011-2017-MINAGRI-PEDICP de 23 de enero de 2017, que resuelven la inclusión del beneficio de movilidad y refrigerio a los







ingresos remunerativos permanentes, **el cual fue ejecutado entre el <u>18 de enero de 2018 al 27 de febrero de 2018</u>. Del mismo modo durante su gestión <b>se pagó un total de S/ 34 425.00 por bono de producción del 2017 distribuido entre 34 trabajadores**, el cual se efectuó sin documento que acredite por parte del Minagri haber ocupado uno de los tres primeros lugares en la ejecución presupuestal, conforme a lo estipulado en la Resolución Nº 5 del Tribunal Arbitral del 12 de diciembre de 2014. Lo que generó perjuicio económico a la Entidad de S/ 256,903.08". (El resaltado es agregado).

- 24. Sobre el particular, cabe indicar que para poder computar los plazos de prescripción es necesario que previamente se determine la fecha en que se habría producido el hecho constitutivo de la falta disciplinaria imputada. En el presente caso, se advierte que son dos los hechos imputados al impugnante: el primero, referido a que no dirigió, supervisó y controló la ejecución del pago adicional por conceptos de compensación por tiempo de servicio − *CTS*, gratificaciones, escolaridad, bonificación vacaciones, refrigerio y movilidad de los años 1994 al 2016, a favor de los trabajadores bajo el régimen Decreto Legislativo № 728; y el segundo, referido a que en su gestión se pagó un total de S/ 34,425.00 por bono de producción del 2017 distribuido entre 34 trabajadores.
- 25. Así, en cuanto al primer hecho imputado la Entidad ha señalado que se habría producido entre el 18 de enero al 27 de febrero de 2018; asimismo, en cuanto al segundo hecho imputado, si bien la Entidad no ha señalado cuándo se habría producido el mismo, en la descripción de los hechos, se detalla que el comprobante de pago de la planilla por el bono de producción del 2017, es de fecha 18 de enero de 2018. Por consiguiente, corresponde considerar el último momento en que se habría producido los hechos imputados al impugnante, esto es, el 27 de febrero de 2018.
- 26. Sobre el particular, el artículo 94º de la Ley Nº 30057 regula la prescripción de la potestad disciplinaria bajo los siguientes términos:

### "Artículo 94. Prescripción

La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces.

La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año".





- 27. En concordancia con ello, el segundo párrafo del numeral 10.1 de la Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC establece que "La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces (...) hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años. Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad".
- 28. En ese sentido, el plazo para **iniciar** el procedimiento administrativo disciplinario prescribe en tres (3) años desde la presunta comisión de la falta, salvo que durante ese periodo, la Oficina de Recursos Humanos tome conocimiento de la falta, en cuyo supuesto, el plazo prescribirá en un (1) año desde esa toma de conocimiento.
  - Sin embargo, cuando la denuncia proviene de un informe de control, la toma de conocimiento opera respecto al funcionario público a cargo de la conducción de la Entidad, momento a partir del cual se computa el plazo de un (1) año, siempre que no hayan transcurrido los tres (3) años desde la presunta comisión de la falta.
- 29. Ahora bien, en el presente caso, los hechos imputados se habrían producido hasta el **27 de febrero de 2018** y la toma de conocimiento del Informe de Control Específico Nº 028-2020-2-0052-SCE por parte del Despacho Ministerial se produjo el **10 de setiembre de 2020**<sup>14</sup>, es decir, antes que transcurriese el plazo de prescripción de tres (3) años desde la presunta comisión de la falta disciplinaria.
- 30. Por consiguiente, a partir del **10 de setiembre de 2020**, la Entidad contaba con el plazo de un (1) año para notificar el acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, dado que la Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR fue notificada el **20 de julio de 2021**, se aprecia que no ha operado el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento desde la toma de conocimiento del informe de control.
- 31. De otra parte, en cuanto al plazo de prescripción de un (1) año de duración del procedimiento, en la Resolución de Sala Plena № 001-2016-SERVIR/TSC, se estableció que "la Ley y el Reglamento han fijado claramente el momento a partir del cual comenzará a computarse el plazo de un (1) año, esto es, desde el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual según el Reglamento se produce con la notificación al trabajador del acto de inicio del procedimiento"; y, precisó

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://app.servir.gob.pe/verificacion/ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Conforme a lo señalado en el acto de inicio del procedimiento.

que "una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse conforme lo ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la <u>emisión</u> de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento". (El resaltado y subrayado es agregado).

32. En tal sentido, el plazo de un (1) año de duración del procedimiento administrativo disciplinario se computa desde que se notifica al servidor el acto de inicio hasta que se emite el acto de imposición de sanción. Así, en este caso, el acto de inicio del procedimiento fue notificado a la impugnante el 20 de julio de 2021 y la Resolución Directoral № 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH fue emitida el 19 de julio de 2022, por lo que tampoco ha operado este plazo de prescripción.

# De la observancia del debido procedimiento administrativo

- El numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece, como 33. principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos principios "(...) no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)".
- En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que "(...)el derecho 34. reconocido en la referida disposición "(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, "judicial", sino que se extiende también a sede "administrativa" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (...)".
- 35. Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la Ley Nº 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una





Tribunal del Servicio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

- 36. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".
- 37. Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.
- 38. En tal sentido, es posible afirmar que las entidades públicas, al emitir un acto administrativo, deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y siguiendo los procedimientos previamente establecidos para la consecución de tal fin, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y, por ende, el debido procedimiento administrativo.
- 39. Igualmente, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "(...) el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial, están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo (...)"15; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "(...) se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés"16.



<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fundamento 13 de la sentencia emitida en el expediente № 8605-2005-AA/TC.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente № 8605-2005-AA/TC.

- 40. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, "Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este último deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que el servidor civil pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de su abogado. El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano sancionador deberá pronunciarse sobre esta en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, indicando el lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral".
- 41. En concordancia con lo señalado, en el numeral 17.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGGSC, se establece que "(...) el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil. (...)".
- 42. A partir de lo expuesto, se advierte que el informe final del órgano instructor debe ser notificado por el órgano sancionador al servidor civil procesado en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, ante lo cual el servidor puede solicitar informe oral en el plazo de tres (3) días hábiles y luego el órgano sancionador debe pronunciarse en el plazo máximo de dos (2) días hábiles. En el presente caso, sin embargo, se advierte que el Informe Nº 0012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR fue emitido el 19 de julio de 2022, en la misma fecha se remitió por correo electrónico al impugnante —no obrando acuse de recibo—, y también el mismo día se emitió la Resolución Directoral Nº 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH mediante la cual se impuso la sanción.
- 43. Al respecto, de acuerdo con el artículo 3º del TUO de la Ley № 27444<sup>17</sup>, la validez de un acto administrativo se encuentra sujeta a que este haya sido emitido





<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

<sup>&</sup>quot;Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos:

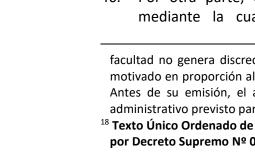
<sup>1.</sup> Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

<sup>2.</sup> Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

<sup>3.</sup> Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una

conforme al ordenamiento jurídico, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez: competencia; objeto o contenido lícito, preciso, posibilidad física y jurídica (para determinar inequívocamente sus efectos) y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; finalidad pública; debida motivación y procedimiento regular (cumplimiento del procedimiento previsto para su generación); habiéndose establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido (presunción iuris tantum), en tanto no sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme lo dispone el artículo 9º del TUO de la Ley Nº 27444<sup>18</sup>.

- 44. Con relación al requisito de procedimiento regular, Juan Carlos Morón Urbina<sup>19</sup> ha señalado que "(...) la declaración de la voluntad administrativa es conformada a través del recorrido de un procedimiento predeterminado por la ley o por prácticas administrativas, en su adecuación, que importa un elemento medular para la generación de un acto administrativo. El citado jurista continúa señalando que "(...) El procedimiento administrativo, es considerado elemento de validez del acto administrativo. La falta de procedimiento, determina la invalidez del acto emitido en armonía con el principio del debido procedimiento, salvo que la norma le habilitare a dictarse de este modo. (...) La inclusión del procedimiento mismo como requisito de validez del acto implica que una vez regulado un procedimiento para la producción de determinado acto administrativo, cualquier modificación a ese acto, aun cuando no esté regulado explícitamente así, debe seguir las mismas formalidades prescritas para su constitución".
- 45. Atendiendo a lo señalado, en el presente caso, no se cumplió con el procedimiento regular para emitir la Resolución Directoral Nº 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH toda vez que el mismo día 19 de julio de 2022 se emitió el informe final de instrucción y, al mismo tiempo, el acto de sanción, habiéndose transgredido lo establecido en el artículo 112º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 y en el numeral 17.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGGSC.
- 46. Por otra parte, de la revisión de la Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR, mediante la cual se dispuso el inicio del procedimiento administrativo





facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación".

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

<sup>&</sup>quot;Artículo 9º.- Presunción de validez

Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda".

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. P. 152-153

del Consejo de Ministros

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

disciplinario, se advierte que se ha imputado al impugnante el incumplimiento de diversas normas: el numeral 1.1 de la Ley Nº 27444; los artículos 10º, 12º, 35º y numeral 1 de la cuarta disposición transitoria de la Ley Nº 28411; los artículos 5º y 6º de la Ley № 30693; y los artículos 8º y 9º de la Directiva de Tesorería № 001-2007-EF/77.15; sin embargo, no se ha motivado la subsunción de la transgresión de dichas normas en relación con los hechos imputados. Tampoco se ha sustentado de qué forma la transgresión de dichas normas sería concordante con sus funciones establecidas en el literal b) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del PEDICP, y en los literales b) y j) del artículo 9º del Nuevo Manual de Organización y Funciones.

- 47. De otro lado, en la Resolución Directoral № 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH mediante la cual se impuso la sanción, se sostuvo que la culpabilidad del impugnante también se advierte por haberse beneficiado de los pagos: "este órgano advierte culpabilidad por parte del servidor investigado, en el sentido, que el mismo se ha beneficiado de estos pagos, tal como se advierte de la lista de beneficiarios de estas entregas económicas y que constan en el expediente administrativo"; sin embargo, este hecho no fue imputado al disponerse el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
- 48. Adicionalmente, se advierte que en la Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR, mediante la cual se dispuso el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en el apartado "descripción de los hechos, la norma jurídica presuntamente vulnerada y la falta que se le imputa" se ha efectuado mención a hechos que el impugnante habría cometido como Abogado de la Oficina de Asesoría Legal y como Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica:
  - "(....) De la evaluación de los comprobantes de pago por intereses de devengados por CTS, gratificaciones, escolaridad, bonificación vacacional, refrigerio y movilidad de los años 1994 al 2016, a favor de los trabajadores de planilla del D.Leg. N° 728 del PEBDICP, se verificó el Informe Legal N° 082-2019-MINAGRI-PEBDICP/OAL del 9 septiembre de 2019, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica a cargo del abogado Eduardo Mego Vela, dirigido a la Dirección Ejecutiva, quien recomendó se efectúe el cálculo de intereses de capital de devengados que determine la deuda real por concepto de refrigerio y movilidad".

"Asimismo, en su Informe Legal N° 004-2019-MINAGRI-PEBDICP/OAL/EMV de 20 de diciembre de 2019, que dirigió al Director de la oficina de Asesoría Legal como abogado de la citada oficina, el señor Eduardo Mego Vela, utilizando los mismos argumentos de su Informe N° 082-2019-MINAGRI-PEBDICP/OAL, recomendando y concluyendo la procedencia del pago del beneficio laboral por concepto de intereses legales generados de devengados





por concepto de refrigerio y movilidad reclamados por el Sindicato (...)".

Sin embargo, supuestamente la imputación que se ha efectuado en el procedimiento administrativo disciplinario radica en hechos que habría cometido el impugnante en su condición de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo; por tanto, no se advierte precisión y claridad en cuanto a bajo qué condición habría cometido los hechos imputados.

- 49. Bajo tal orden de consideraciones, al haberse transgredido el procedimiento regular, así como el deber de motivación, la Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR notificada el 20 de julio de 2021 y la Resolución Directoral № 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH del 19 de julio de 2022 se encuentran inmersas en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley № 27444²0.
- 50. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que la nulidad declarada en la presente resolución no constituye un pronunciamiento que genere impunidad respecto a los hechos materia de imputación contra el impugnante, toda vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar el debido procedimiento administrativo como garantía de todo administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes.

### Sobre la medida cautelar

- 51. La emisión de medidas cautelares tiene como fundamento la necesidad de garantizar el derecho de "tutela judicial efectiva" y en la necesidad de evitar perjuicios graves, tanto para el Estado como para los ciudadanos, mientras no exista sentencia o decisión definitiva en el proceso o procedimiento<sup>21</sup>.
- 52. El TUO de la Ley Nº 27444, establece en su artículo 157º la posibilidad de que dentro de un procedimiento administrativo a su cargo, la autoridad administrativa dicte medidas cautelares con la finalidad de asegurar el cumplimiento y eficacia de sus decisiones, facultad que posee el Tribunal conforme al artículo 17º del





<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

<sup>&</sup>quot;Artículo 10º.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

<sup>1.</sup> La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>GAMBIER, Beltrán y ZUBIAUR, Carlos A., *Medidas Cautelares contra la Administración: Fundamentos, Presupuestos*, en Revista de Derecho Público Nºs 57-58, 1994, pp. 40-41.

Reglamento, siempre y cuando el pedido cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el TUO de la Ley Nº 27444<sup>22</sup>.

- 53. Conforme al artículo 611º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, para que la medida cautelar pueda ser emitida no basta solamente el pedido de la parte interesada, sino que deben concurrir tres requisitos:
  - a) La verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris);
  - b) Peligro en la demora (periculum in mora); y,
  - c) La razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la decisión.

En caso faltase alguno de estos requisitos no sería factible que la autoridad administrativa pudiera dictar una medida cautelar.

- 54. Respecto al primer requisito, el administrado deben haber acreditado la apariencia del derecho o interés, lo cual es diferente a la certeza de la pretensión que puede ser o no declarada en el procedimiento que emita la autoridad administrativa dentro del procedimiento.
- 55. El segundo requisito está referido al posible daño grave o irreparable que se pudiera ocasionar, ante un supuesto retraso por parte de la administración en la emisión de la decisión, evitando que en caso ésta sea favorable no pueda ser cumplida.
- 56. En atención al tercer elemento, la medida cautelar que solicita el administrado debe guardar relación con su pretensión principal, es decir, debe existir una conexión lógico-jurídica entre el derecho o materia respecto a la cual se está solicitando tutela efectiva a la administración y la medida cautelar planteada.
- 57. En el presente caso, el impugnante ha solicitado se le conceda medida cautelar; sin embargo, considerando que la finalidad de las medidas cautelares es garantizar el cumplimiento de la decisión final emitida por la autoridad administrativa dentro de un procedimiento, y siendo que mediante la presente resolución esta Sala está emitiendo pronunciamiento sobre el recurso de apelación, no procede la medida cautelar planteada. Por lo demás, corresponde señalar que conforme a los considerandos 8 al 13, este Tribunal no cuenta con competencia para pronunciarse sobre las remuneraciones dejadas de percibir por el impugnante.

(...)

Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar del Tribunal".





<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo № 008-2010-PCM "Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación





Presidencia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil;

### **RESUELVE:**

PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Carta № 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR notificada el 20 de julio de 2021 y de la Resolución Directoral Nº 0298-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH del 19 de julio de 2022, emitidas por el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, respectivamente.

SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por el señor EDUARDO MEGO VELA.

TERCERO.- Retrotraer el procedimiento administrativo disciplinario al momento de precalificación de la falta, debiendo el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, tener en consideración los criterios señalados en la presente resolución.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al señor EDUARDO MEGO VELA y al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.

**QUINTO.-** Devolver el expediente al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (https://www.servir.gob.pe/tribunal-sc/resoluciones-de-salas/segunda-sala/).

Registrese, comuniquese y publiquese.

SANDRO ALBERTO **NUNEZ PAZ** VOCAL

RØSA MARIA VIRGINIA CARRILLO SALAZAR PRESIDENTE

GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO VOCAL

P7

